



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	Ordinaria
DEMANDANTE	Luz Dary Marín Orozco
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 05 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>005 2023 00065</b> 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 265 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de sobreviviente - muerte de pensionado. Reclama cónyuge - no se exige requisito de pervivencia del vínculo, solo 5 años de convivencia en cualquier tiempo
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al **recurso de apelación** presentado por la apoderada de **Colpensiones y el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta entidad**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, dentro del proceso que le promoviera la señora **Luz Dary Marín Orozco**. con radicado único nacional 05001 3105 **005 2023 00065** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 029**, que se plasma a continuación.

## **Antecedentes**

La demandante solicita que Colpensiones sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, a partir del 30 de octubre de 2020, fecha del fallecimiento de su cónyuge Víctor Ariel Estrada Ramírez. También reclama las mesadas adicionales, intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y/o indexación, así como las costas.

Su petición se fundamenta en que a Víctor Estrada le fue reconocida la pensión de vejez mediante la Resolución 015007 del 26 de mayo de 2009, con efectos a partir del 1º de junio de dicho año. Alega que, tras el deceso de su esposo, el 30 de octubre de 2020, solicitó a Colpensiones el 28 de mayo de 2021 el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, negada mediante el acto administrativo 145393 del 23 de junio del mismo año, bajo el argumento de no convivencia con el causante hasta la fecha de su óbito, decisión frente a la cual interpuso los recursos de ley, desatados de manera adversa en las Resoluciones SUB215543 y DEP 9839 del 2021. Sostiene que contrajo matrimonio con Víctor Estrada el 01 de diciembre de 1979, data desde la cual iniciaron su convivencia, la cual perduró hasta el 2012, cuando decidió separarse de cuerpos al enterarse de que este abusó sexualmente de su hija.

Mediante providencia del **23 de mayo de 2023, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción. Colpensiones, debidamente notificada, presentó escrito de contestación en el cual reconoce la calidad de pensionado del señor Víctor, la fecha de su muerte, el matrimonio celebrado el 01 de diciembre de 1979, la reclamación elevada por la demandante y el contenido de las resoluciones que negaron la misma. Los restantes supuestos no le constan. **Resistió las pretensiones**, proponiendo excepciones de fondo tendientes a enervarlas, tales como: inexistencia de la obligación de reconocer y pagar

pensión de sobrevivientes por no cumplimiento de requisitos legales, así como intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, descuento del retroactivo por salud y la genérica.

La primera instancia culminó con **sentencia** proferida el 24 de octubre de 2023 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, en la que declaró que a la señora Luz Dary Marín Orozco, en calidad de cónyuge supérstite, cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional, tras la defunción de Víctor Ariel Estrada Ramírez. En consecuencia, condenó a Colpensiones a reconocerle y pagarle, **a partir del 30 de octubre de 2020**, la prestación en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, en razón a 14 mesadas al año, **calculando el retroactivo entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de octubre de 2023** en la suma de \$42.141.140,00, valor sobre el cual autorizó los descuentos a salud. A partir de **01 de octubre de 2023**, la mesada asciende al mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los aumentos de ley. Dispuso el pago de los intereses moratorios a partir del 28 de julio de 2021 y hasta tanto se cancele la obligación. Los medios exceptivos no encontraron prosperidad. Gravó con costas a Colpensiones.

Como sustento, manifestó el fallador que, la normatividad aplicable al asunto es la vigente al momento del fallecimiento del pensionado, esto es, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dejando claro que no se encontraba en discusión la causación del derecho. respecto al requisito de convivencia, hizo referencia a la jurisprudencia actual y reiterada de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, la que establece que la cónyuge separada de hecho puede reclamar legítimamente la pensión si convivió con el causante por al menos 5 años, en cualquier tiempo, así como la que señala que en casos de separación respaldada por cuestiones de salud,

empleo o para conservar la vida e integridad debido a maltrato físico o psicológico, no se puede culpar al cónyuge víctima por la pérdida del derecho a la pensión, evidenciando según los medios de prueba aportados, tanto documentales como testimoniales, que la pareja estuvo unida desde que contrajeron matrimonio en 1979 hasta el 2012, y que si bien se advertía una ruptura, la misma, según lo expuesto por la reclamante y lo enunciado por la hermana del fallecido obedeció a que este abusó de su hija, lo cual, dio lugar a que Luz Dary se separara. Por tal, concedió la prestación en cuantía de salario mínimo y en razón a 14 mesadas al año.

En lo que respecta a los intereses moratorios, los estimó procedentes, en tanto, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral tiene dicho que la cónyuge separada de hecho, con vínculo matrimonial vigente, tiene derecho a la prestación de sobrevivencia si demuestra cinco años de convivencia en cualquier tiempo, y en este caso tal supuesto se cumple, luego al formularse reclamación 28 de mayo de 2021, la entidad contaba con un término de 2 meses para resolver, por tal, los mismos corren a partir del 28 de julio del mismo año, sobre cada una de las mesadas pensionales.

La apoderada de Colpensiones expresó desacuerdo y formuló **recurso de apelación**. Sus Argumentos se centran en la falta de cumplimiento de los requisitos por parte de la demandante para ser considerada beneficiaria de la prestación. Señaló que no se demostró una convivencia de 5 años inmediatamente anteriores al deceso del pensionado y que no es aplicable la línea jurisprudencial sobre la cónyuge separada de hecho, ya que no se evidenció que la pareja mantuviera el vínculo vivo y actuante durante el periodo distanciamiento hasta la fecha de la muerte. Además, cuestionó la ausencia de pruebas que respaldaran las afirmaciones de maltratos y abusos contra la hija de la señora Luz Dary.

En relación con la condena al pago de intereses moratorios, sostuvo que aplicó la normatividad y jurisprudencia vigente al emitir los actos administrativos, sin que su actuar pueda ser calificado como caprichoso ni negligente, y destacó que, aunque anteriormente se sostenía que este concepto se aplicaba por el mero retardo en la resolución de la petición, en la actualidad se ha moderado y se deben analizar las circunstancias que rodean cada caso.

Colpensiones, al hacer uso del **término para presentar alegaciones**, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada. Enfatizó en que la demandante no cumple con el requisito de convivencia efectiva durante los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante. Alega que la separación entre la pareja ocurrió aproximadamente 10 años antes, sin que se haya restablecido el vínculo y sin contar con pruebas, ni siquiera sumarias, que evidencien hechos violentos que justifiquen la aplicación del precedente de la Corte Suprema de Justicia, aspectos que imposibilitan el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Cita la sentencia SU149-2021 y ruega se le dé aplicación a la misma, al establecer un cambio de postura en cuanto al requisito de convivencia, fijando un periodo de 5 años sin importar si el causante es afiliado o pensionado.

En orden a decidir, basten las siguientes,

## **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados, se tienen: la señora Luz Dary Marín Orozco y Víctor Ariel Estrada Ramírez contrajeron matrimonio el 01 de diciembre de 1979, falleciendo este último el 30 de octubre de 2020. En

Resolución 015007 de 2009 se le reconoció al señor Estrada Ramírez la pensión de vejez a partir del 01 de junio de 2009, en cuantía de \$496.900,00. Tras el deceso de este su cónyuge, la hoy actora, reclamó asignación de sobrevivientes el 28 de mayo de 2021, resuelta de manera negativa por parte de Colpensiones en el Acto Administrativo SUB145393 del 23 de junio del mismo año, argumentando:

*"Así las cosas, y de conformidad con la normatividad antes mencionada, así como la investigación administrativa realizada, esta administradora determina que la señora MARIN OROZCO LUZ DARY ya identificada, no ostenta la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes frente al causante, señor ESTRADA RAMIREZ VICTOR ARIEL, toda vez que no hubo convivencia hasta la fecha de fallecimiento del causante, es por esta razón, que es procedente negar el reconocimiento de la prestación solicitada."*

Decisión confirmada por las Resoluciones SUB215543 y DPE9839 del 2021, ante los recursos interpuestos.

Considerando el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, el **problema jurídico** en esta instancia se centra en determinar si es posible el reconocimiento y pago de la pensión reclamada por la actora en calidad de cónyuge del señor Víctor Ariel. En caso afirmativo, se procederá a examinar lo concerniente al retroactivo y la viabilidad o no de condena por intereses moratorios.

En ese orden de ideas, frente a la calidad de beneficiaria, se tiene como criterio jurisprudencial decantado, que la norma a observar para definir el derecho pensional es la vigente a la fecha del deceso del pensionado, para el caso, **30 de octubre de 2020**, por lo que es aplicable el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003. Dicha preceptiva estipula como beneficiarios:

- a) *En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. **En caso de que la pensión de***

**sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente *supérstite*, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;**

Así, al no existir duda de la causación del derecho, al ser el fallecido pensionado por vejez (Resolución 015007 de 2009), queda por verificar el requisito de **convivencia no inferior a cinco años anteriores al deceso**, siendo este el **elemento material** que da derecho a la prestación, y el **lapso de cinco años de obligatoria acreditación** cuando de muerte de pensionado se trata, tal como se adoctrinó en sentencia SL5270-2021, donde revalida que el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, exige un tiempo mínimo de cohabitación de 5 años, pero únicamente ante la muerte del **pensionado**, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, o *convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes*, así como para, *proteger su núcleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto.*

Precisándose por la jurisprudencia especializada frente a la convivencia, que esta tiene lugar cuando entre las personas de la relación, existió un «[...] *vínculo dinámico y actuante de solidaridad y acompañamiento espiritual y económico*» (CSJ SL, 10 mayo 2005, radicación 24445), sustentado en «[...] *lazos afectivos, morales, de socorro y ayuda mutua*» (sentencia SL1576-2019), y frente al contenido material de la misma en sentencia SL1576–2019, se explicó que «[...] *la legislación y la jurisprudencia acogen el criterio material de convivencia efectiva como elemento fundamental para determinar quienes tienen la calidad de beneficiarios*», basada en la demostración de «[...] *muestras reales y efectivas de la continuación de la vida común*», siendo la prueba de este requisito, por un término no inferior a cinco años esencial para acreditar la condición de beneficiario de la

sustitución pensional, exigiéndose para ello un mínimo probatorio, explicado en sentencia SL4050 de 2019, en los siguientes términos:

*"Por mínimo probatorio se entiende el nivel de convencimiento judicial, derivado de la valoración del conjunto de pruebas, que sirve para acreditar un hecho y tenerlo por cierto en un proceso judicial, para tomar una decisión respecto de las pretensiones o de las excepciones debatidas en el trámite jurisdiccional. Así pues, en el ejercicio de la función judicial, el juez formará su convencimiento al punto de encontrar demostrado el hecho en función de la disposición jurídica de la cual se derivarán los efectos, a partir de los postulados que informan el derecho a la prueba -artículo 29 de la Constitución Nacional- y conforme con la regla de juicio establecida, en el caso del procedimiento laboral, por el artículo 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.*

*Así pues, el estándar o mínimo estará determinado por el régimen normativo que sea aplicable a la situación jurídica que sirve de base a la controversia judicial.*

*En casos como este, la situación jurídica consistente en la causación de una pensión de sobrevivientes, está regida por las disposiciones positivas que constituyen el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, cuya dinámica normativa es el de la causación objetiva, es decir, que el reconocimiento de las prestaciones está condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos para cada prestación. Es así como la pensión de sobrevivientes sólo será reconocida en la medida en que el pretendiente beneficiario demuestre el cumplimiento cabal de las exigencias normativas para tal efecto.*

*Así las cosas, en asuntos relacionados con la solicitud del reconocimiento de prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, como es el caso, se requerirá la observancia de un estándar probatorio de prueba necesaria...*

No puede perderse de vista que, a partir de una interpretación armónica del inciso 3º del literal b) ya citado, se ha sostenido que, en caso de separación de hecho, la cónyuge no pierde el derecho pensional respecto del fallecido, sosteniendo la Corte que *«la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años»*, puede ser acreditado *«en cualquier tiempo»*. Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del *de cujus*, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-



2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020), por lo que no resulta correcto sostener que la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separada de hecho, debe acreditar el requisito de convivencia en cualquier tiempo **y, además, que los lazos afectivos, de solidaridad, de familiaridad, de apoyo y socorro, persistieron hasta el fallecimiento del causante**, en tanto, la tesis especializada y reiterada del órgano de cierre, a partir de la sentencia SL5169-2019, ha sido enfática en advertir que de la normativa transcrita se colige que, la acreditación para la data del óbito de algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua», que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes» para ser beneficiaria de la prestación en debate, configura un requisito adicional que no previsto por el inciso 3.º del literal b). Se explica en tal providencia:

*... la no existencia de lazos de afecto frente a una persona con la que convivió, pero que por alguna circunstancia ya no forma parte de su vida, no puede convertirse en una causal para negar un derecho, máxime cuando la ley a cuya interpretación se apela para tal desconocimiento, no contempla ese requisito. Incluso si estableciera como exigencia tal paradigma decimonónico, que sería absolutamente contrario a los principios de igualdad y de equidad de género que establece nuestro ordenamiento constitucional, se haría más imperiosa la necesidad de su adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no contempla la norma.*

Luego, la cónyuge separada de hecho, *"pero con vínculo matrimonial vigente, no tiene como carga demostrar la continuidad de los lazos familiares y afectivos, dado que no constituye esta circunstancia una exigencia legal prevista en el inciso 3.º del literal b) antes transcrito"*. (ver fallos SL359-2021, SL966-2021, SL1707-2021, SL2015-2021, SL2464-2021, SL4321-2021, SL5259-2021, SL2257-2022, SL401-2023 y SL633-2023).

Al ser este el precedente especializado vertical, se acoge por esta Sala de Decisión y se procede a analizar el material probatorio disponible, teniéndose que en la investigación administrativa se llegó a la siguiente conclusión:

*NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Luz Dary Marín Orozco, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.*

*De acuerdo con la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se estableció que el señor Víctor Ariel Estrada Ramírez y la señora Luz Dary Marín Orozco, contrajeron matrimonio el 01 de diciembre del año de 1979, sin embargo, se logró establecer que no convivieron los últimos 5 años de vida del causante.*

*Ya que existen contradicciones en los testimonios aportados, ya que una sobrina del causante informó que los implicados vivieron de manera permanente, sin embargo, la hermana del causante indicó que los implicados estaban separados desde hacía 8 años y refirió que el causante vivía con ella.*

*Al realizar labor de campo en el sector donde reside la solicitante los vecinos informan que los implicados vivieron de manera permanente, pero al hacer labor de campo en el sector donde vive la hermana del causante, los vecinos indicaron conocer al causante por más de 10 años, quien vivía con la hermana, indican que era soltero no le conocieron compañera o cónyuge al causante y mencionan no conocer a la solicitante.*

*Por lo anterior, **se estableció que los implicados vivieron desde el 01 de diciembre del año de 1979, fecha de su matrimonio hasta el año 2012 (sin especificar día y mes), fecha en que las partes se separan de cuerpos y el causante se traslada a vivir con una hermana.***” (resaltos intencionales)

Deducción que se basó en las entrevistas realizadas a la hoy demandante y demás personas relacionadas. La señora **Diana María Rengifo Estrada**, sobrina del señor Víctor, afirmó conocer a la señora Luz Dary Marín Orozco como la esposa de su tío, quienes convivieron por más de 40 años, durante los cuales no observó separaciones y procrearon 4 hijos. Indicó que la pareja vivió en Manrique y que el fallecimiento de Víctor ocurrió el 30 de octubre de 2020 debido a problemas pulmonares. **Silvia de Jesús Estrada Ramírez**, hermana del causante, manifestó conocer la convivencia de más de 20 años entre Víctor Ariel y Luz Dary, quienes tuvieron 4 hijos. Afirmó que observó una separación definitiva aproximadamente 8 años antes y que Víctor se fue a vivir con ella desde entonces. **Emilse López y Jenifer Marcela Ortiz Arango** afirmaron tener trato con Luz Dary y Víctor Ariel por 30 años, durante los cuales no evidenciaron ruptura entre la pareja. **Gildardo Antonio Castellón Rivera** declaró que conoció a Víctor durante

10 años y que este le mencionó que se había separado de su esposa hacía tiempo, viviendo con su hermana Silvia. **Argemiro León Lastra y Rosalba Otálvaro**, esbozaron que Víctor residía en la casa de su hermana y que siempre lo vieron allí.

En el marco de este trámite, se llevó a cabo el **interrogatorio a la señora Luz Dary Marín**, quien aseveró que su convivencia con el señor Víctor Ariel se dio entre el 01 de diciembre de 1979, cuando contrajeron matrimonio, hasta mediados de 2012. En esa fecha, él se fue a vivir con su hermana Silvia, después de que ella le pidiera que abandonara la casa al enterarse por su yerno que su hija había sufrido abuso por parte de su padre. Manifestó que no tuvo contacto con su esposo desde que se separaron y que no hablaba con Silvia, la hermana de este. Cuando se le pidió que especificara cuánto tiempo estuvo Víctor donde su hermana, afirmó que fueron 12 años y que fue durante ese tiempo que no vivieron juntos.

**Libia Jaramillo Cataño**, vecina de Luz Dary y Víctor Ariel por 30 años, en el barrio José Antonio Galán, conoció a los 4 hijos nacidos de esa unión y los visitaba cada 8 días, cuando Luz Dary regresaba del trabajo como empleada doméstica interna. Aseguró que no vivía en el barrio desde hace unos 8 años y que la pareja se fue del lugar antes, sin recordar la fecha exacta. Durante el tiempo en que estuvieron en el barrio, nunca vio ninguna separación entre ellos. No sabe dónde residían en 2020 y afirmó que Luz Dary le comentó que se separó de su esposo hacía 12 años.

**Víctor Manuel Orozco Ortiz**, vecino del lugar donde residió la pareja, los conoció en 1986 o 1987 y por 10 a 15 años al vivir al lado de su casa. Afirmó que la pareja dejó el sector hace unos 15 años y no sabe su paradero. Durante el tiempo en que estuvieron en el lugar, conoció a los hijos y no sabe de ninguna separación entre ellos.

El juez, de manera oficiosa y mediante llamada telefónica, recibió la declaración de **Silvia Estrada Ramírez**, hermana del causante, quien adujo que Víctor vivía con ella 15 años antes de su fallecimiento, ya que su esposa le dijo que no lo permitía más en su casa. Al pedirle que explicara por qué en la investigación administrativa había manifestado que Víctor estuvo en su casa por espacio de 8 años antes de su deceso, indicó que eso no era así, sino que él llevaba con ella entre 14 o 15 años. Manifestó que Víctor y Luz vivieron juntos y que no hubo separación entre la pareja desde la fecha de su matrimonio hasta que él se fue para su casa.

En ese orden de ideas, concatenando los medios de convicción documentales y testimoniales, a la luz de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 61 del C. P. T. y de la S.S., es posible concluir que la señora Luz Dary Marín demostró el requisito de convivencia exigido por la ley y la jurisprudencia para tener derecho a la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge. Se corrobora que el vínculo de pareja iniciado el 01 de diciembre de 1979 no fue liquidado ni disuelto, y a pesar que se identifican algunas contradicciones en las versiones proporcionadas, lo cierto es que esto no afecta el derecho, ya que se evidencia en las conclusiones de la investigación administrativa que estuvieron unidos desde 1979 hasta 2012 y del interrogatorio de parte y las deponencias se extrae que Víctor y Luz cohabitaron desde que se casaron y, al menos, hasta el 2005, esto es, 15 años antes del deceso de Víctor, al haber manifestado su hermana Silvia que este vivió con ella durante dicho lapso, sumado a que la propia actora afirma que le pidió a su esposo que se fuera de su casa y, aunque no recordaba con precisión las fechas y las confundía, mencionó que hacía aproximadamente 12 años que no estaban juntos, por tal, al haber convivido por un lapso de alrededor de 25 años, se tiene que se supera con creces el lapso de **cinco años en cualquier tiempo para la cónyuge con vínculo matrimonial vigente.**

Por lo tanto, al establecerse los requisitos para otorgar la prestación, se confirma en este aspecto, así como el disfrute desde el 30 de octubre de 2020, considerando 14 pagos al año, ya que se trata de una sustitución de pensión en la que **no** ha operado la prescripción, de acuerdo con el artículo 151 del del CPT y de la SS. en concordancia con el 488 del CST, en tanto, véase como la prestación se solicitó el 28 de mayo de 2021, con negativa en acto administrativo SUB145393 del 23 de junio de 2021, confirmado en las Resoluciones SUB 215543 del 03 de septiembre de 2021 y DPE9839 del 05 de noviembre del mismo año, y la demanda se instauró el 16 de febrero de 2023

Al realizarse el cálculo entre el 30 de octubre de 2020 y el mismo día y mes de 2023, considerando para ello el valor mensual que percibía el occiso para la fecha de su deceso, es decir, el mínimo legal, se obtuvo suma idéntica a la liquidada por a quo, razón por la cual se confirma la sentencia en este apartado. Aclarándose el numeral tercero en el sentido de indicar que el retroactivo se liquida desde el 30 de octubre de 2020, y el cuarto para tenerse que es a partir del 01 de noviembre de 2023 que se seguirá pagando una nada de \$1.1600.000,00, sin perjuicio de los descuentos y aumentos de Ley.

En cuanto a los **intereses moratorios**, es de indicar que en la sentencia SL2117-2022, donde se reitera la SL3130-2020, la Corte precisó aspectos frente a este concepto, así: *i)* su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su aplicación; *ii)* buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y *iii)* **existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales**. Así, el retardo

o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena tales intereses, por lo que se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones, sin que se advierta para el caso, dadas las **pautas antes anotadas, una razón para la negativa** el en la resolución DPE9839 del 5 de noviembre de 2021, en tanto, para dicha fecha ya existía un precedente consolidado frente a que no es necesario, para la cónyuge acreditar el tiempo de cinco años de convivencia **inmediatamente anterior al deceso**, pues desde el 27 de noviembre de 2019, cuando se expidió la SL5169, se explicó que podía ser probado en cualquier tiempo y sin mediar la pervivencia del vínculo y en la investigación administrativa se concluyó que la pareja cohabitó entre el 01 de diciembre de 1979 y el 2012, esto es, por espacio superior al exigido, **por lo que se confirma el fallo revisado en este apartado. Al haberse presentado la solicitud el 28 de mayo de 2021, los mismos corren a partir del 28 de julio del mismo año.**

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$2.320.000,00

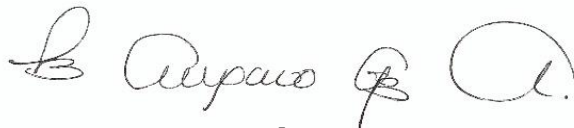
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **aclara el numeral tercero y cuarto de** la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Luz Dary Marín Orozo**, en contra de **Colpensiones**, para indicar que el retroactivo se calcula a partir del 30 de octubre de 2020 y hasta el 31 de octubre de 2023, y que es a partir del 01 de noviembre de 2023, que se seguirá cancelando una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente - \$1.160.000,00- sin perjuicio de los descuentos e incrementos de ley.

**En lo demás se confirma.**

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$2.320.000,00

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**